

AUTO

En Sevilla a 22 de marzo de 2011.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO- Por el Procurador Sra. Bernal Gutiérrez; en nombre y representación de Antonio Abad Del Castillo Márquez; se presentó en fecha de 24-01-2011 escrito planteando por los motivos que son de ver en el mismo la posible inconstitucionalidad del artículo 16.5 de la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor.

SEGUNDO- Cumplidos los trámites establecidos en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional; se dio traslado de la cuestión de inconstitucionalidad presentada con suspensión del plazo para dictar sentencia a las demás partes personadas a fin de que manifestaran dentro del plazo de 10 días lo que tuvieran por conveniente sobre dicha cuestión. Por el Ministerio Fiscal y asimismo por la defensa del menor acusado y de los responsables civiles se han presentado sendos escritos oponiéndose por los motivos que son de ver en los mismos a la cuestión de inconstitucionalidad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

UNICO- El artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que cuando el Juez o Tribunal considere, de oficio o a instancia de parte, que una norma con rango de ley aplicable al caso de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión al Tribunal Constitucional con sujeción a lo dispuesto en la mencionada Ley.

La acusación particular en el expediente de reforma 65/2009 seguido contra el menor F. J. considera que el artículo 16.5 de la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor es contrario a nuestro texto constitucional por vulnerar el principio de seguridad jurídica (artículo 9.3 de la CE) en relación con el principio de unidad y exclusividad de la jurisdicción (artículo 117 de la CE) que afectaría al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a las reglas de un juicio justo y equitativo que se recoge como derecho fundamental en el artículo 24 de la Constitución Española.

El precepto cuya constitucionalidad se cuestiona por la acusación particular establece que “cuando los hechos mencionados en el artículo 1 hubiesen sido cometidos

conjuntamente por mayores de edad penal y por personas de las edades indicadas en el mismo artículo 1, el Juez de Instrucción competente para el conocimiento de la causa, tan pronto como compruebe la edad de los imputados, adoptará las medidas necesarias para asegurar el éxito de la actividad investigadora respecto de los mayores de edad y ordenará remitir testimonio de los particulares precisos al Ministerio Fiscal a los efectos prevenidos en el apartado 2 de este artículo”. En definitiva se cuestiona por la acusación particular la constitucionalidad de este precepto que origina como efecto inmediato la apertura por unos mismos hechos delictivos de dos procedimientos distintos de instrucción así como, en su caso, la celebración de dos juicios y el dictado de dos sentencias diferentes. De entrada debe señalarse que este juzgador no cuestiona de modo alguno la constitucionalidad del mencionado precepto pero sí cuestiona si la acusación particular realmente tiene la íntima y firme convicción de que el mencionado precepto puede ser contrario a nuestro texto constitucional o si utiliza el mecanismo de la cuestión de inconstitucionalidad como instrumento jurídico a su alcance con la finalidad de que no recaiga sentencia en el procedimiento seguido contra el menor acusado hasta que no se celebre o, en su caso, recaiga sentencia en el procedimiento que se sigue contra los acusados mayores de edad en la jurisdicción de adultos en atención a sus respetables y legítimos intereses. Entiende este juzgador que no puede cuestionarse que el referido artículo 16.5 de la LORRPM no es una norma aplicable por este juzgador como Juez de Menores ni de su aplicación depende la validez del fallo que en su día se dicte en el expediente de reforma ya que es una norma que va dirigida al Juez de Instrucción durante la fase de instrucción y lo que no puede justificarse por la acusación particular es que se presente la cuestión de constitucionalidad invocando el referido artículo el mismo día señalado para la celebración de la audiencia y que, mientras tanto, haya estado personada en el ejercicio legítimo de su derecho como acusación particular en los dos procedimientos interviniendo y solicitando la práctica de las diligencias que ha estimado pertinente a su derecho sin haberse planteado siquiera la posible inconstitucionalidad de toda la fase de instrucción y fase intermedia practicada no sólo en la jurisdicción de menores sino también en la jurisdicción de mayores como consecuencia del doble enjuiciamiento.

Pero es que además la existencia de un procedimiento penal específico para los menores de edad penal y diferenciado del procedimiento penal para los mayores de edad no sólo no es inconstitucional sino que es perfectamente constitucional y se ajusta a las previsiones establecidas en los convenios internacionales suscritos por nuestro país y a lo dispuesto en la legislación existente en el Derecho Comparado en los países que pertenecen a nuestro mismo entorno y tradición jurídica y; en este sentido; debe ser obligatoriamente citado el artículo 40.3 de la Convención de los Derechos del Niño “ Los estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicas para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales” , el artículo 10.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 o la Regla número 2 dentro de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing de 1985) que establece que en cada jurisdicción nacional se procurará promulgar un conjunto de leyes, normas y disposiciones aplicables específicamente a los menores delincuentes así como a los órganos e instituciones encargadas de las funciones de la administración de justicia de menores e igualmente debe ser citados los artículos 39.4 y 10 de nuestro texto constitucional.

Vistos los artículos citados y los demás de general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

Dispongo: Que no procede plantear la cuestión de inconstitucionalidad solicitada por la acusación particular al Tribunal Constitucional por considerar que el artículo 16.5 de la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor no es contrario a nuestro texto constitucional y; en consecuencia; procede acordar el alzamiento de la suspensión del plazo para dictar sentencia en el expediente de reforma tramitado ante este Juzgado con el número 65/09.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Contra la presente resolución no cabe interponer recurso alguno sin perjuicio del derecho que asiste a las partes de poder reproducir la cuestión de inconstitucionalidad en segunda o sucesivas instancias.

Así; por esta resolución; lo pronuncia, manda y firma; Alejandro Vian Ibáñez; Magistrado-Juez del Juzgado de Menores designado para el conocimiento del presente expediente de reforma. Doy Fe.